

Militarismo, integración y conflictos fronterizos: los casos de Perú, Ecuador y México

Francisco R. Dávila Aldás

Resumen

La severidad de los ajustes emprendidos en la década pasada en toda la región, para entrar en la llamada era de la "globalización", ha generado una serie de conflictos internos y de carácter internacional que han activado nuevamente el militarismo. Este, no sólo está dificultando el gran esfuerzo para cooperar y colaborar entre nuestros países sino que está poniendo en riesgo la precaria democratización que la región había logrado. El caso del enfrentamiento peruano-ecuatoriano resultó ser paradigmático en el campo de los conflictos fronterizos internacionales, pero el caso de Chiapas en México, así como la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), también lo son en la medida en que impulsan el militarismo como respuesta a la pérdida de legitimidad de los gobiernos nacionales en etapas de transición como la que hoy vive México.

Abstract

The severe economic shocks, made in the decade throughout the region, have generated a series of domestic and international conflicts, which in turn have put back the Armed Forces into the scene. This development, not only weakens what little has been accomplished in terms of cooperation and integration, but also threatens the incipient democratic Latin American regimes. The latest Peruvian-Ecuadorian border dispute a clear example; however, the Chiapas and the Popular Revolutionary Army (EPR) uprisings in Mexico offers a better illustration of the Armed Forces intervention in politics due to the weakening of governmental institutions.

Globalización y militarismo

A partir de 1960, los cambios tecnológicos y sus impactos en la producción, así como en los flujos de información, surgen como un factor determinante en la evolución industrial a escala nacional e internacional pues facilitan la integración de bloques industriales y comerciales que se disputan el mercado mundial en el llamado proceso de integración global o "globalización económica",¹ cuya contrapartida simultánea se expresa también como un proceso de regionalización económica en la que se condensa una fuerte hegemonía política de entidades que como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, después de la

¹ En Francisco Dávila, "globalización", "integración global" o bien "globalización económica", conceptos a repensarse en el campo de la relaciones internacionales actuales, discutimos más ampliamente este problema; ver a este respecto I. Martínez y R. Velázquez (coordinadores), *Las relaciones internacionales en el umbral del siglo XXI*, FCPYS, UNAM (en prensa).

Segunda Guerra Mundial, han asimilado para su beneficio los adelantos científicos y tecnológicos aparejados a la Tercera Revolución Industrial.

Resulta interesante constatar que el armamentismo y el militarismo –ambos impulsados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y por los intereses políticos y económicos de las dos grandes potencias de esta tercera revolución industrial–, luego de una carrera desenfrenada de crecimiento, que amenazaba constantemente con el holocausto nuclear,² disminuyó sensiblemente entre los países de alto desarrollo, pero paradójicamente se incrementó entre los subdesarrollados.³

Es de todos conocido que la venta de material de guerra por parte de Estados Unidos entre las dos guerras mundiales a los países europeos le dio a este país una enorme ventaja en el campo del desarrollo industrial e impulsó su vertiginoso crecimiento hasta comienzos de 1960. También la carrera armamentista, dadas las rivalidades de las dos grandes potencias de ese entonces y los intereses políticos y económicos contrapuestos de sus respectivos aliados, sirvió para alentar la producción industrial que decaía a nivel mundial luego de los años de auge del comercio mundial a finales de los años sesenta. No obstante, los gastos militares cuantiosos de las dos grandes potencias sobrepasaron los beneficios económicos y fueron, en gran parte, los causantes de la alta inflación, del estancamiento de la economía mundial en los setenta y de la crisis generalizada del sistema económico mundial en los años ochenta. El cuadro 1 nos da una idea del crecimiento a largo plazo de los países económicamente más poderosos y de los impactos del armamentismo sobre sus economías.

Este fenómeno fue particularmente visible en la economía norteamericana, la más importante del sistema capitalista, y en la de la Unión Soviética. Así entonces, el debilitamiento actual de la primera y el colapso de la segunda forman parte del contexto de las explicaciones del incremento del militarismo y del armamentismo en los países en desarrollo.

Hasta mediados de los años sesenta, la utilización de los recursos financieros en las economías de los países desarrollados y para el apoyo de otras economías (Europa y Japón en particular después de la Segunda Guerra Mundial) no era onerosa, dados los bajos niveles inflacionarios, de tal modo que el crédito era el medio más adecuado para estimular la demanda lo que incrementó considerablemente el consumo y el dinero para el financiamiento de los déficits presupuestarios. No obstante, el crecimiento de los gastos militares de las dos grandes potencias para mantener su hegemonía declinante en el mundo,

² A. Heller y F. Feher, *Sobre el pacifismo*, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1985, pp. 43-68.

³ Cfr. M. Simai, *Global Power Structure, Technology and World Economy in the Late Twentieth Century*, London, Printer Publishers, 1990, p. 78.

Cuadro 1
Tendencias del crecimiento económico a largo plazo
en Estados Unidos, Europa y Japón
(Promedio anual de crecimiento en %)

| Países | Antes de la I Guerra 1890-1913 | Antes de la II Guerra 1922-1937 | Después de la II Guerra 1953-1973 | Después de la I ra. crisis petrolera 1973-1979 | Segunda crisis y recuperación petrolera 1979-1987 |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Estados Unidos | 3.9 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 2.2 |
| Europa Occidental | 2.0 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | 3.1 |
| Japón | 2.7 | 3.9 | 9.5 | 4.4 | 4.0 |

Fuente: Tomado de Y. Kogane, "Economic growth before and after de oil crisis and the possibility of de industrialization", en F. Howard y Didsbury Jr., *The Global Economy*, op. cit. ant. p. 270, y completado por F. Dávila con base en *Long Term Economic Growth 1860-1970*, U.S. Department of Commerce, June 1973, p. 105, para 1922-1953; para 1953-1973, *International Financial Statistics*, IMF; Western Europe, *The European Economy Growth and Crisis*, edited by Andrea Boltho, Oxford University Press, 1982, p. 10. Japón: antes de 1913 y para 1922-1937, *Handbook of National Income*, Economic Research Institute, Economic Planning Agency, June 1975, p. 139; para 1953-1973 y 1973-1987, Itoh M., *The World Economic Crisis and Japanese Capitalism*, The Macmillan Press, Ltd. Hong Kong, 1990, p. 69.

no sólo contribuyó al incremento del déficit público sino a retroalimentar los mecanismos inflacionarios por la vía de la política monetaria y crediticia; los precios de los salarios de las industrias militares y de la defensa si bien actuaban, por momentos, como aceleradores de la producción industrial también presionaban sobre los precios de los productos de los demás sectores y restaban recursos para la producción no militar, tomando vulnerable el resto de la economía a los impactos de la inflación.

Esto pudo constatarse en la economía norteamericana a finales de los años de 1960, 1982 y 1990, al finalizar la intervención norteamericana en Irak. El déficit sin precedentes de su economía se ha mantenido aunque con la llegada de Clinton al poder se ha tratado de disminuirlo y junto con ello la inflación se ha atenuado y la producción industrial ha vuelto a despuntar disminuyendo sensiblemente el desempleo y la baja en los niveles de vida.

Así pues, como resultado de la imposibilidad de utilizar el poder militar para dominar por parte de las dos grandes potencias, y frente a las escasas posibilidades de dinamizar la economía de las mismas con el incremento del gasto en la industria militar, la lucha en el campo militar se fue desplazando hacia el campo económico.

Cuadro 2
Crecimiento de Estados Unidos después
de la Segunda Guerra Mundial
(porcentaje de cambios promedio anual
del Producto Interno Bruto)

| | | |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1922-1929 | 4.7 | Boom de la posguerra |
| 1929-1933 | -8.6-2.1 (media) | Gran depresión |
| 1933-1937 | 9.5 | Recuperación |
| 1937-1944 | 8.6 | Economía de guerra |
| 1944-1949 | -2.1-1.5 (media) | Recesión de la posguerra |
| 1949-1953 | 6.2 | Recuperación (Guerra de Corea) |
| 1953-1973 | 3.6 | Crecimiento después de la Guerra con Corea hasta la crisis petrolera. |
| 1973-1982 | 2.2 | Crisis del petróleo y recesión |
| 1982-1992 | 2.8 | Leve recuperación y nueva recesión |
| 1992-1997 | 3.2 | Formación del bloque norteamericano, lucha por nuevos mercados |

Fuente: Ver cuadro 1.

Aún más, con el desmoronamiento del bloque socialista en 1989, con la desintegración de la URSS en 1991 y con la aceleración de la integración europea en 1992, la confrontación estratégica Este-Oeste entre las dos grandes potencias militares, Estados Unidos y la Unión Soviética, ya no fue el pretexto para el incremento de los gastos militares. De hecho éstos, que en un momento fueron los impulsores de una acelerada industrialización en Estados Unidos y en la URSS, entre las dos guerras mundiales se fueron convirtiendo en un lastre económico cuando Europa (Alemania en particular) y Japón, libres de gastos bélicos, enfilaban sus cuantiosos ingresos hacia un mayor impulso de sus economías para lograr el bienestar social de sus respectivos pueblos.

La carrera por el dominio militar entre las dos grandes potencias declinantes se transformó entonces en la búsqueda de una cooperación,⁴ no exenta de conflictos, cuyos objetivos descansaban en la búsqueda de una mayor libertad y democracia para lograr una mejor vida para sus respectivos pueblos. De este modo el militarismo a nivel mundial (a pesar de la aventura de la guerra contra Irak y de los conflictos étnicos y religiosos que esconden los anhelos de integración de nuevos estados nacionales en Europa) declinó a comienzos de los años noventa como tendencia dominante en favor de una estrategia de desarrollo económico global.

No obstante, aunque la economía mundial cada vez más integrada e interdependiente experimentó grandes cambios positivos, los efectos negativos de esta etapa de globalización vertiginosa se expresaron claramente no sólo en una inflación rampante que en los años ochenta se volvió galopante lo que condujo a la crisis global y a la caída de la producción y del empleo en la mayoría de los países con tremendas repercusiones de deterioro social en los económica y políticamente menos poderosos.

Este complejo proceso aceleró la conformación de los bloques europeo, asiático y norteamericano,⁵ verdaderas islas de proteccionismo, de apropiación de recursos naturales y humanos, así como de manejo y administración de las diferentes actividades productivas de los países que los integran, ha venido cambiado el ejercicio directo del poderío militar (sobre los países que —como los de América Latina— importaron de los anteriores nuevos productos de consumo y tecnológicos para su desarrollo económico y social) por la imposición de políticas económicas que han resultado ser estrategias de avasallamiento y expoliación más eficaces y menos costosas. Así, no por simple coincidencia éstas han permitido a los países industrializados la expansión económica más prolongada después de la posguerra, lo que ha significado el aceleramiento de sus procesos de modernización tanto de sus maquinarias como de sus plantas, o sea, una creciente capitalización y prosperidad para sus habitantes; en contraste, para los países de América Latina y del Caribe estas estrategias dieron origen al "decenio perdido", dado que éstos, debido a la estrategia del pago de la deuda, hipotecaron su crecimiento convirtiéndose así en exportadores netos de capitales (su débito pasó de 327 mil millones de dólares en 1982 a 416 mil

⁴ Cfr. Francisco Dávila y E. Ortiz, en "Del antagonismo a la cooperación entre el Este y el Oeste para la búsqueda de un mundo más humano", en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, México, FCPyS, UNAM, núm. 149, julio/septiembre de 1992.

⁵ *Ibid.*, "La revolución científico-técnica, la globalización industrial, la formación de bloques y los nuevos cambios mundiales", en *Relaciones Internacionales*, México, CRI, UNAM, núm. 58, abril/junio de 1993.

en 1989) y en productores de miseria y desesperanza para las mayorías ya pauperizadas de nuestros países.⁶

Integración económica y militarismo

Es innegable que en la actualidad, a pesar de la disminución del control por la vía militar, cuyo gasto global disminuyó considerablemente, asistimos a una militarización creciente en los países en desarrollo y particularmente en algunos países de América Latina. Esta aparente contradicción de la tendencia a la desmilitarización y los asomos constantes de enfrentamiento entre algunos países latinoamericanos,⁷ cuando se está constantemente hablando de y promoviendo la integración de fronteras, hace necesario un análisis más puntual de la gestación de estos conflictos. Es el caso del Pacto Andino que podría verse continuamente afectado pues los enfrentamientos armados entre Perú y Ecuador y los conatos de conflictos fronterizos entre Colombia y Venezuela, resabios de viejos y anteriores no resueltos enteramente, no sólo pueden ser un incidente coyuntural en el marco de las acciones integrativas emprendidas en el interior del Grupo Andino sino que afectarían la filosofía misma de la integración, que se está consolidando entre los países de América Latina, cuya base de sustentación descansa en la cooperación y complementariedad entre los países para aprovechar de modo más conveniente sus energías y escasos recursos económicos frente a la necesidad extrema de sus pueblos por salir de la situación de extrema pobreza en la que se debaten las grandes mayorías de su población.⁸

Como hemos tratado de demostrar, las tendencias a la globalización y a la integración económica creciente entre los países tienden a limitar seriamente las funciones militares aparejadas a la defensa de las fronteras y con ello desaparecen las bases para la justificación de un enorme presupuesto para gastos militares; esto es, cuantiosas erogaciones para la creación de cuerpos militares especializados que requieren de un nuevo armamento, tecnológicamente más avanzado que el de sus enemigos externos, para la defensa de la soberanía nacional en peligro.

⁶ Ver a este respecto G. Rosenthal, "Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1988", *Comercio Exterior*, México, febrero de 1990, pp. 129-130, y CEPAL, "Transformación productiva con equidad", Santiago, Chile, junio de 1990.

⁷ Nos referimos principalmente al enfrentamiento armado que se desarrolló en los primeros días del mes de enero de 1995 entre Ecuador y Perú y cuyas negociaciones para firmar la paz definitiva aún no han terminado, seguido del conato de enfrentamiento entre Colombia y Venezuela.

⁸ En Perú, de un total de 23 millones 651 mil habitantes, el 46,5 por ciento vive en condiciones de extrema pobreza mientras que en Ecuador de 10 millones 677 mil habitantes el 46% también la sufre.

Ahora bien, hablando claramente, la integración económica entre países es de hecho una entrega de parte de la soberanía, al menos la económica, en función –dice la doctrina– de una mayor complementariedad para un más eficaz y acelerado desarrollo económico en vista de que la mayoría de la población pueda disfrutar de los frutos del progreso y la modernización.

En efecto, con el fin de la guerra fría la carrera por el dominio militar de los países hegemónicos se transformó en la búsqueda de una nueva estrategia económica integrativa que, aunque no desactivó totalmente el complejo industrial militar de las naciones más poderosas, lo limitó significativamente.⁹ De hecho, el complejo industrial militar en el que las corporaciones transnacionales y los gobiernos colaboran para la fabricación de armamentos cada vez más sofisticados para las guerras o enfrentamientos militares de alta o baja intensidad, de guerras de defensa o disuasión, o de asalto y enfrentamiento directo, no se han detenido sino que se han sofisticado.

En la actualidad el enfrentamiento entre países no depende de la gran cantidad de armamentos o pertrechos militares tradicionales sino de las sofisticadas maquinarias de guerra de la era científica y tecnológica que tienen que ser adquiridos a precio de oro a los grandes productores de armas del mundo.

Así entonces, en la era de la integración mundial, la posesión y el control de los conocimientos científicos y técnicos, del mercado, así como la tenencia de los bienes de capital, de los artefactos físicos, sus diseños y el manejo y control empresarial de los mismos, posibilitan no sólo el poderío económico sino el mantenimiento del poder militar que le es sucedáneo. Vale recordar que, a mediados de los ochenta, los países en vías de desarrollo se convirtieron en los mayores consumidores de armamentos. Así, entre 1986 y 1993 el 70 por ciento del valor de los contratos sobre compra de armas firmados en el mundo involucró a dichos países. Sus gastos anuales en términos de mantenimiento de sus fuerzas armadas y particularmente en compra de armas ascendieron aproximadamente a los 21 mil millones de dólares. Suma extraordinaria que supera en muchos de los países al gasto público en educación y en salud necesario para la sobrevivencia de sus pueblos.¹⁰

De este modo, los avances científicos y tecnológicos han facilitado no sólo el rápido crecimiento de las empresas industriales en los países de mayor desarrollo sino la localización de sus subsidiarias en los de menor desarrollo y esto también es cierto para las del complejo industrial militar. Así, en muchos países del mundo, las transnacionales aprovecharon las facilidades gubernamentales, la

⁹ Se estima que entre 1986 y 1994 el gasto militar disminuyó a un ritmo del 3 por ciento anual.

¹⁰ Ver a este respecto, O. Arias Sánchez, *Paz, población y medio ambiente. El ser humano ante el armamentismo*, México, Serie Internacional de Conferencias sobre asuntos de Población, Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, 1995, p. 5.

mano de obra y los recursos baratos para elaborar sus productos militares y obtener grandes ganancias. El caso de Israel y de Irak son paradigmáticos y estos países, en especial el primero, han sido los mayores abastecedores de armas entre los países de América Latina.

Al mismo tiempo, con la globalización industrial, la producción se descentralizaba para aprovechar las economías de escala y los mercados, mientras la planeación de su desarrollo global y sus estrategias empresariales se siguieron realizando en los cuarteles generales de las mismas que, en la mayoría de los casos, estaban en sus países de origen. Con ello la venta de armamentos tradicionales se va desplazando a otros países y los de mayor sofisticación tecnológica son controlados monopólicamente por los países de alto desarrollo, los que son vendidos de acuerdo con la estrategia global que las grandes potencias implementan para mantener su dominio.

De este modo, la tendencia constante hacia la conformación de integraciones regionales y bloques económicos y políticos que colaboran y compiten a la par por el dominio del mercado mundial y por los recursos humanos y materias primas se va consolidando. Es así como, a partir de las nuevas aplicaciones científicas y tecnológicas, el poder político y militar, que están íntimamente relacionados, se van repartiendo el mundo, dándose así un uso más eficiente de los recursos y de la mano de obra mundiales al mismo tiempo que se van perfilando mayores niveles de institucionalización y formalización de estos poderes.

Por las razones anteriores, los intentos de avanzar hacia estadios más desarrollados de globalización e integración mundiales, sea en el campo económico o en el militar así como en el político y social, no han detenido los conflictos y las más de las veces parecieron impulsarlos, pues la integración a un bloque u otro, la pertenencia a una región u otra y a sus esferas de influencia, produce constantes fricciones y fracturas que pueden poner en peligro la unidad nacional y la soberanía de los diferentes países si no existe un fuerte lazo de unificación cultural o ideológica que lo contrarreste.

Es en este campo donde el papel de los militares y su función de defensores del territorio nacional (pero, principalmente, de la conservación de los valores culturales y sociales que conforman la nación) surgen como justificadores de una ampliación del gasto militar, el que a su vez, en el interior de las fuerzas armadas de nuestros países, legitima las acciones de su intervención directa en la política del país (prohibida formalmente en las constituciones y leyes) como forma extrema de solucionar los problemas económicos y sociales que los gobiernos y los partidos tradicionales no han podido resolver.

De allí que la afirmación teórica avanzada por algunos estudiosos de estos fenómenos —que puede resumirse en la tendencia a la desaparición de las fronteras y de los espacios nacionales en la era de la globalización e integración,

y la insistencia en el surgimiento y consolidación de estados multinacionales o con amplios poderes regionales—, tiene que ser analizada y mejor entendida a la luz de los conflictos que la consolidación de éstos traería en el interior de las fuerzas armadas, cuya función primordial es la defensa del enemigo externo o sea, de todo poder económico o político que atente contra la integridad territorial, asiento real de la soberanía nacional.

Dentro de la anterior perspectiva una de las formas más comunes y eficaces de activar las funciones militares tradicionales, o sea el militarismo en un país, estribaría en la gestación intencionada de conflictos fronterizos por parte del poder político vigente, por parte de los propios militares o por ambas instituciones; ello con el fin de legitimar y justificar un incremento mayor del gasto militar esto es, de la necesidad que tienen los militares de asumirse como defensores de la patria, de la soberanía, de la integridad territorial en peligro.

Lo anteriormente dicho, ligado con la idea actual de reforzar la regionalización y la conformación de bloques mediante la consolidación de países fuertes económica, política y socialmente, puede compaginarse y articularse fácilmente con la necesidad de consolidar y de agrandar las fronteras económicas y de reforzar las defensas nacionales, es decir, los lazos sociales y culturales así como políticos, científicos y tecnológicos en vista de un fortalecimiento y defensa de los recursos humanos y naturales del país contra los posibles competidores extranjeros que, con suma habilidad, adaptan sus estrategias de penetración comercial a la idiosincrasia de cada pueblo o nación.

Ello activaría una nueva función que no es privativa de las fuerzas armadas en nuestros países pero que, en ausencia de grupos, fuerzas sociales y clases que tomen en sus manos la tarea de modernización, como un medio para lograr el desarrollo económico y social de la nación, podrían asumirla. En este caso, la institución armada se arrogaría el papel de promover el desarrollo económico y social aunque tuviera que poner en suspenso su función de subordinación al poder político y económico que en el interior del Estado moderno se encargan de estas acciones.

Así, el incremento del militarismo en América Latina podría ser explicado, por un lado, como una forma de defensa de la integración económica promovida por las grandes potencias económicas en vista de allegarse recursos humanos y naturales baratos para consolidar su hegemonía. Estaríamos hablando entonces de una integración ofensiva desnacionalizadora que gesta o desarrolla, por otro lado, una integración defensiva que reacciona frente a esos avances con un reforzamiento del nacionalismo. En la primera se estaría destacando el hecho de conformar una estrategia de integración regional en el sentido de asegurar una gradual y firme marcha hacia la globalización mundial, disponiendo de recursos humanos y naturales baratos; mientras en la segunda, sin renunciar a

la idea de integración económica, se trataría de ir elaborando acuerdos por países y regionales para integrar políticas económicas y de cooperación científica y tecnológica en el sentido de ir poco a poco utilizando los recursos naturales y sociales para el fortalecimiento de las empresas nacionales; o sea, para ir remozando sus viejas plantas productivas y así emprender con mayor fuerza la conquista del mercado mundial. Lo anterior resulta ser totalmente legítimo como una estrategia de modernización gradual, lo que está totalmente alejado de la idea de protección del *status quo*; esto es, de la protección a ultranza de una economía tradicional, de plantas productivas ya envejecidas, de industrias ineficientes y de una actividad económica y administrativa que, so pretexto de defensa de lo nacional, reduciría las capacidades de estos países en el campo económico y comercial y los pondría al margen de las transformaciones mundiales.

Cabe anotar que en la integración defensiva, que parece ser el caso en la mayoría de los países latinoamericanos, se presentaría como una necesidad la creación de fronteras y protecciones temporales en los campos económicos y de la actividad social como respuesta a la apertura indiscriminada que la ideología neoliberal plantea como la única estrategia válida para lograr un acceso rápido a la integración global.

En este contexto, frente a una apertura indiscriminada de nuestros países al mercado mundial (el caso de México puede ser un buen ejemplo) se estaría motivando la activación de las funciones militares y civiles de defensa de la nación contra la intromisión desmedida de los poderes transnacionales que, ostensiblemente, están jugando en contra del desarrollo económico y social de la mayoría de la población y de los grupos sociales en los países de América Latina.

Así entonces, las fuerzas armadas y los grupos de intelectuales y sectores sociales interesados en detentar un puesto importante en el camino de la integración mundial o en el caso contrario de continuar conservando sus privilegios y su poder económico y político monopólicos, intentarían ver en el inexorable movimiento de mundialización integrativa de las economías nacionales, la acción depredadora de las economías de los países más desarrollados que se mundializan, que conquistan con las empresas transnacionales los mercados del orbe y pulverizan o hacen desaparecer los débiles mercados financieros y de servicios nacionales y entrarían justificadamente en acción, incrementándose extraordinariamente el gasto militar a expensas del gasto social.

Integración económica, seguridad nacional e insurgencia armada

En un mundo en constante transformación como el actual, y en el que las superpotencias mundiales han entrado firmemente a disputarse la hegemonía

del desarrollo en el campo científico y tecnológico, se están llevando a cabo modificaciones profundas en el campo económico –esto es la capacidad de innovación para introducir nuevos procesos y productos–, en el campo político para renovar y reestructurar las instituciones –y en el campo social– para preparar a los diferentes grupos sociales a sobrellevar e impulsar los cambios aparejados a la realización de los procesos de integración y globalización industrial y financiera. En este escenario, la capacidad creciente alcanzada por las anteriores potencias en la movilización de recursos humanos y naturales, para explotarlos, para usar sus capitales, para invertirlos en capital de trabajo, en servicios e información para volverlos competitivos y así ganar una posición clave en la producción y en el comercio mundiales, ha llevado a las mismas a un proceso de recomposición, de modificación y de creación de nuevas alianzas y compromisos con grupos internos e internacionales en vista de sustentar y consolidar su poderío económico.

Estos cambios, apenas señalados, han modificado profundamente los esquemas tradicionales de alianzas internas en el campo económico y político de cada uno de los países latinoamericanos que no sólo han creado inestabilidad económica sino también social. Los tremendos ajustes económicos han reprimido económica y socialmente a gran parte de la población latinoamericana y están frustrando sus anhelos e ideales, mientras un puñado de privilegiados en alianza con el poder industrial y financiero externos disfrutan de los sacrificios ajenos. Según datos del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la situación de la región es de "emergencia" porque más de la mitad de la población está en niveles de pobreza y el 20 por ciento se ubica en rangos de pobreza extrema a nivel mundial.

La ilusión de una modernización a la vuelta del camino aparejada a la inserción en la economía mundial, puede conducirnos a la inseguridad nacional y al desgobierno. El deslumbramiento de una estrategia de mediano plazo, que se concretó en un duro ajuste aún no concluido y con muy altos costos sociales, puede terminar con una crisis política de hondas consecuencias y minar la ya vulnerada legitimidad de los gobiernos actuales.

El endurecimiento en el ajuste económico que se está dando en algunos países para lograr los cambios estructurales requeridos para realizar el salto a las lides comerciales mundiales (este es el caso de Ecuador, Perú, México, Argentina y Venezuela entre los más golpeados; pero también es el caso de Chile, Brasil, Colombia, Bolivia y de la mayoría de los países centroamericanos y del Caribe) ha estado activando la función represiva de los militares contra las protestas y exigencias de la población. La justificación de esta intervención armada contra la población, considerada como el "enemigo interno", dio durante mucho tiempo vigencia a la doctrina de la "seguridad nacional" que legitimó el uso de la

fuerza por parte de las dictaduras militares que ha sufrido América Latina luego de la Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad las dictaduras se están disfrazando en gobiernos fuertes y autoritarios, capaces de realizar sin contemplación la represión económica y social de grandes núcleos sociales que no están de acuerdo con las estrategias dimanadas del poder político monopolizado por unos pocos. Ello obliga a los militares a desempeñarse como el brazo armado del Estado, del poder civil, frente a los brotes internos de insurgencia, contra la hegemonía o el dominio que ejercen determinados grupos sociales sobre otros. Ello inexorablemente tiende a la legitimación del militarismo como forma extrema de llevar a cabo el proyecto de inserción en la economía internacional, so pretexto de que si no se realiza esta tarea, el desequilibrio interno de nuestras economías aumentará en la medida en que nos alejemos del desarrollo al cual tienden los países desarrollados.

En verdad se está jugando con una idea de estabilidad política basada en el dominio de la fuerza que, en lugar de tomar en su verdadera dimensión los brotes de insurgencia legítima causados por años de abandono que han experimentado los grupos sociales a los que nunca han llegado los frutos del progreso técnico aparejados a las diferentes etapas de modernización que han experimentado nuestros países. Es por esta razón que la nueva modernización que se quiere impulsar en nuestros países debe estar fincada en la estabilidad política conseguida mediante la legitimación intelectual y moral del poder estatuido, del liderazgo estatal, definido como el buen gobierno de la cosa pública, de lo que es común a todos; lo que implica no sólo el crecimiento económico sino el desarrollo social o sea, el reparto de la riqueza material y social entre los diferentes grupos sociales que participan en su creación e incremento.

El surgimiento de monopolios de poder político, es decir de sectores sociales privilegiados que al amparo del Estado (entendido como la expresión del poder social o sea de todos los grupos sociales) medran sin importarles el resto de la sociedad, requieren del uso de la fuerza militar o del control burocrático y corporativo de los núcleos sociales, ambos dirigidos y propiciados por el Estado y protegidos por los gobierno de turno. Este incremento del gasto social en funciones de represión, control y subordinación institucional, generan a la corta o a la larga conflictos que luego dan lugar a la aparición de organizaciones armadas; ello porque, al ser coartada la lucha política, ideológica o por los espacios institucionales, no les queda más remedio que usar la violencia para hacerse justicia.

La función represiva del Estado, "la razón de Estado" —o sea el uso de la fuerza para llegar al orden, al "imperio de la ley" o del derecho— no es, ni ha sido, ni será fuente de legitimidad, pero sí una vertiente genética de dictaduras

y de burocracias militares que defienden aun a costa de sus vidas el privilegio del que unos cuantos disfrutan.

El uso de la fuerza, de la violencia como legítima, sólo se da en casos extremos de conflicto social y ésta se justifica, es moralmente justa, si públicamente se constata, se acepta o se puede aceptar que se ha ejercido violencia, se ha violentado, se ha puesto en peligro el derecho a la vida o a la libertad de un individuo o de un grupo social y éste o estos se defienden, usan la violencia en legítima defensa.

En esta forma, la función militar represiva –que significa para los países y para cada país que la sufre un desperdicio social y una merma de la libertad–, puede ser vista también como un desprecio por la democracia o sea, como una falta o una carencia de la participación de todos, a través de las instituciones correspondientes, en el gobierno de la sociedad, esto es en la solución conjunta de los problemas que nos atañen a todos. La ampliación de esta participación, la irrupción de la “sociedad civil” para la construcción de las instituciones que faciliten una vida mejor y en libertad, alejaría las causas estructurales del conflicto de legitimidades y por tanto contribuiría en América Latina a mermar las posibilidades de que las fuerzas armadas, el militarismo, se justifique como fuerza represiva para acallar el reclamo por las injusticias, por la inmoralidad social del poder estatuido ilegítimamente.

Finalmente la libertad y la vida, así como la democracia que hace la realización de las anteriores, son valores que en la actualidad son reconocidos por la mayoría de los gobiernos y que, es más, son objetivos primordiales de la nueva modernización y globalización integrativa que se trata de impulsar.

La insurgencia armada chiapaneca

Queremos en este apartado ejemplificar algunas de las hipótesis avanzadas anteriormente respecto del activamiento de la función militar represiva cuando surge un grupo social que considera ilegítimo al poder estatuido y lo enfrenta por la vía armada. Es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que el 1º de enero de 1994 desafía al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y al Ejército Mexicano, exigiéndole su renuncia por ser ilegítimo, para que a partir de allí se instauren transformaciones políticas que conduzcan a la democracia.

El gobierno como fue obvio exigió la rendición inmediata de los “alzados” y los amenazó con el uso de la fuerza, la función represiva que asigna el Estado a las Fuerza Armadas en estos casos. En realidad se realizó un despliegue armado de más de 15 mil operativos del Ejército que después de una cacería inhumana de los presuntos zapatistas y de tremendos bombardeos a la población civil durante más de una semana no consiguió la rendición de los mismos. Al contrario

el clima de zozobra y desestabilización se extendió hacia el Distrito Federal y las principales ciudades del país.

El gobierno —frente a una posible ingobernabilidad nacional que podría declararse ante la ineficacia de las fuerzas armadas nacionales en someter a los “alzados” y frente a las presiones de Estados Unidos para que se diera una pronta solución al conflicto—, tuvo que cambiar de táctica e iniciar un diálogo por la paz, como lo exigía la mayor parte de la “sociedad civil”. Esta última, ante las explicaciones contundentes del subcomandante Marcos de que el levantamiento chiapaneco era para defenderse de la violencia que se había ejercido sobre los indígenas desde hace centurias, lo respaldaba. Salían, pues, a ofrendar sus vidas por una vida digna para sus hijos y para que el pueblo mexicano obtuviera en paz la democracia que se le había negado.

Ahora bien, las exigencias de los zapatistas no tenían un contenido meramente económico y localista sino que exigían un gobierno legítimo esto es democrático; o sea, iban más allá de la “democracia del voto” que puede ser manipulada, como en efecto sucedió. Pedían y siguen pidiendo transformaciones profundas en el interior del reparto del poder político y en la distribución de las riquezas lo que va de la mano con la justicia y equidad realmente inexistentes dentro de la concentrada y corrupta estructura política donde la simulación, el privilegio y la arbitrariedad reinan.

Es por estas razones que el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se estancó momentáneamente, a pesar de que el habilidoso gobierno salinista intentó de varias maneras concretarlo, antes de las elecciones del mes de agosto. De todos modos el gasto militar en el país se había incrementado, tanto para reforzar la seguridad interna, puesta en entredicho por el asesinato de Luis Donald Colosio, como para mantener al Ejército Mexicano, que estaba bien pertrechado en sus posiciones y esperaba cualquier momento para ejercer su acción represiva. Además, su legitimidad al igual que la del gobierno al cual defendía, era puesta en entredicho tanto por parte de los defensores de los derechos humanos que lo acusaban de haber asesinado salvajemente a los campesinos chiapanecos como por ciertos congresistas norteamericanos que lo acusaban de haber utilizado el armamento que le había donado el Gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico contra el pueblo chiapaneco.

Ganadas las elecciones a base de infundir miedo a los verdaderos cambios y con promesas de esperanza¹¹ que al siguiente día de las elecciones se irían perdiendo porque las tensiones políticas acumuladas por la fuerte y desigual contienda no auguraban la paz y el bienestar que el Dr. Zedillo había ofrecido,

¹¹ Cfr. F. Dávila, *Del milagro a la crisis, la ilusión... el miedo... y la nueva esperanza*, México, Ed. Fontamara, 1995, pp. 404-405.

se intentó calmar esta difícil situación de falta de credibilidad con el anuncio de un nuevo Plan Económico y con la renovación del Pacto pero de nuevo la frágil estabilidad política sufrió una fuerte sacudida a finales de septiembre. Un nuevo asesinato político se había perpetrado y la precaria situación económica amenazaba desmoronarse sin remedio,¹² poniendo al gobierno en una situación política difícil.

La transición presidencial se presentaba difícil en un campo político y social minado por las turbulencias económicas, la inseguridad social y la impunidad reinantes. Se buscó anclarse en nuevos préstamos para estabilizar la situación. Los banqueros, del país, cercados por el incremento de sus carteras vencidas y por la incapacidad de competir con los bancos foráneos que ya habían recibido luz verde para establecerse en el país, clamaban por protección y se opusieron al establecimiento de mayores controles por parte del gobierno para proteger a los ahorradores. La lucha sorda de posesiones surgió entre los financieros internacionales —que exigían trato preferencial y garantías para traer sus dólares— y los nacionales, que disfrutaban monopólicamente del negocio bancario.

Ante la creciente inestabilidad política, por el involucramiento de algunos eminentes miembros del PRI en el asesinato del político guerrerense Francisco Ruiz Massieu, se activó la turbulencia financiera y la fuga de capitales creció. Las reservas del país a fines de octubre disminuyeron en casi un 30 por ciento y se situaron en 17 mil 196 millones de dólares; no obstante, el gobernador del Banco de México aseguraba a los banqueros del país, en la inauguración de la 58 Convención Nacional Bancaria, la solidez del régimen cambiario descartando el riesgo de una crisis de liquidez y garantizando un clima propicio para el sostenimiento del desarrollo económico.¹³ Sin embargo, se elevaron las tasas de interés para evitar una mayor fuga de capitales pues los calificadores internacionales de la seguridad financiera del país, dada la inestabilidad política y el deterioro violento de los niveles de vida de la población, le asignaron la calificación de “riesgo soberano” o de “bajo grado de inversión”.¹⁴

En este clima de tensión y entre protestas, manifestaciones de descontento social y abucheos al informe triunfalista de Salinas transcurrió el final del sexenio y se calificó a Zedillo como presidente electo. La inestabilidad económica se acrecentó no sólo por el impacto del anuncio del incremento en las tasas de

¹² Ver “Otro miércoles negro” e “Incertidumbre en mercados financieros”, en *El Financiero*, México, 29 de septiembre de 1994, pp. 1 y 7, 8 y 9.

¹³ Ver “Reservas en 17 mil 196 mdd”, en *Ibid.*, 20 de octubre de 1994, pp. 1, 4, 5, 6 y 7.

¹⁴ Comparar el optimismo de los banqueros mexicanos con la cautela de los bancos extranjeros en “Firme la inversión foránea”, “Riesgo soberano del país” y “Cautela de bancos extranjeros”, en *Ibid.*, 27 de octubre de 1994, pp. 1, 4, 5 y 7.

interés de los Bonos del Gobierno en Estados Unidos sino porque en el interior del sistema político¹⁵ continuaba el desmoronamiento del monolitismo autoritario y la división interna entre las facciones que, cobijadas en la impunidad del poder, intentaban seguir medrando cuando el pastel se había achicado en extremo y la oposición política había ganado ya importantes espacios políticos.

Reanudar el diálogo con el EZLN aligeraría en algo la presión que el gobierno tenía no sólo por parte de Estados Unidos sino de los grupos políticos que exigían se terminara con el problema de los "alzados" aniquilándolos y del Ejército Mexicano que en diferentes ocasiones había manifestado su respaldo incondicional al nuevo presidente y que estaba una vez más dispuesto a iniciar la contrainsurgencia armada.

Dentro de este escenario político enrarecido la economía iba de tumbo en tumbo, sin timonel que la contuviese y justo a los veinte días de la llegada al poder del nuevo gobierno se anuncia la ya comentada devaluación del peso y se iniciaba el derrumbe financiero que dejó pasmados a los ilustres hacendados de la política neoliberal en el extranjero. No podía faltar un chivo expiatorio y éste fue el EZLN que, en un alarde de habilidad, burlando el cerco tendido por el Ejército Mexicano, tomó pacíficamente 38 municipios. En su comunicado el subcomandante Marcos recordaba al novel presidente: "tome una medida seria y profunda si es que en realidad su voluntad es de diálogo", y con un fino olfato político, ante la debilidad manifiesta del gobierno, fijó tres condiciones para restablecer la tregua: 1) Solución a los conflictos poselectorales en Veracruz, Chiapas y Tabasco; 2) Reconocimiento del "gobierno de transición" instaurado en Chiapas, y 3) Reconocimiento de la Comisión de Intermediación encabezada por el obispo Samuel Ruiz.¹⁶

Una vez más el gobierno mexicano vuelve a estar atrapado entre dos tenazas: por un lado Estados Unidos que exige explicaciones por el derrumbe financiero y pide garantías fuertes para el rescate que comprometen seriamente la soberanía del país y por el otro la oposición real: el EZLN y el PRD que, en la coyuntura, aparecen coaligados. Ahora bien, Estados Unidos consiguió no sólo el respaldo a sus intereses con el ingreso petrolero mexicano —que se depositará en una cuenta bancaria en ese país de la cual la administración de Clinton echaría mano si el país se declarara insolvente— sino el doblegamiento y subordinación de México a su estrategia hegemónica que se acelerará con un trago más fuerte de la amarga medicina recetada por el FMI.

¹⁵ Cfr. "Crisis en el sistema", en *Ibid.*, 24 de noviembre de 1994, pp. 4-5.

¹⁶ Cfr. "Máxima presión en los mercados" y "Rebelión indígena en el Sureste", en *Ibid.*, 20 de diciembre de 1994, pp. 1, 5, 7, 26 y 1, 45-54, respectivamente.

En estas circunstancias el gobierno cede a las presiones represivas y militaristas que agazapadas esperan el momento de acción. Se prepara una escaramuza espectacular, parecida en principio a la que realizó el dictador Fujimori contra Sendero Luminoso. Se anuncia la captura del subcomandante Marcos pero en realidad se trataba del destape del pasamontañas de Marcos y con ello, el revelamiento de su presunta identidad. Se captura a pretendidos zapatistas y se muestra el cuantioso arsenal de armas que consistía en una cuantas viejas pistolas, machetes y petardos mostrados profusamente por los canales de televisión. Con este montaje de ocasión se trata de involucrar a los zapatistas como violadores del orden público y de incitadores a la rebelión y a los actos de terrorismo.

En verdad, según los propios comentarios del subcomandante Marcos, el gobierno intentó la captura de los cabecillas del movimiento pero estos fueron alertados a tiempo e iniciaron su huida hacia las montañas de la Selva Lacandona, mientras el Ejército Mexicano arrasaba las poblaciones en las que habían acampado los zapatistas y con la táctica de "tierra arrasada" quería cortar todas las estrategias de reorganización de los huestes zapatistas.

Se volvía a cometer el mismo error que el anterior presidente había cometido; es decir usar la fuerza militar para someter a la insurgencia armada que ya se había legitimado profundamente en el seno del pueblo mexicano. El señalar a los zapatistas como delincuentes comunes y al ponerlos fuera de la ley, cuando pocos meses atrás estos habían sido los interlocutores del gobierno, creaba un problema jurídico que el Congreso de la Unión y el presidente tendrían que dirimir si querían reanudar el diálogo que la sociedad civil exigía al nuevo Gobierno.

La trampa tendida al EZLN no había funcionado, pues se veía claramente que el Estado lo enfrentó una vez más por la vía de la fuerza militar, disfrazada de justicia legítima y trató de acorralarlo para negociar sobre una posición de fuerza. No obstante, se vio obligado a retroceder una vez más, pues la táctica de usar la fuerza para resolver un problema político, no de proporciones locales —como lo quiere ver el gobierno— sino de resonancia nacional, dada la capacidad de convocatoria y de respaldo a nivel nacional e internacional que han alcanzado los zapatistas, resulta infructuosa. Estos al luchar por la libertad, la justicia y una mejor vida para ellos y para toda la población del país, tremendamente golpeada por los ajustes económicos modernizadores, están planteando justamente la modernización política que el país necesita, esto es, un tránsito a la democracia radical. Ello los hace portadores de una fuerza moral universal que en el momento actual los sitúa junto con el PRD como los catalizadores de las demandas más sentidas de todo el pueblo mexicano; esto es, una real participación de la disidencia, de la sociedad plural, en la solución del problema económico y de

los graves rezagos políticos y sociales que el país viene arrastrando desde hace ya casi 50 años.

El problema de la insurgencia armada en México no ha sido aún resuelto, la Consulta Nacional a la que convocó EZLN y realizada por Alianza Cívica, de acuerdo con los analistas políticos, fue exitosa y la "sociedad civil" respaldó al zapatismo para que se convierta en una fuerza política independiente o se coalique con algún partido y luchara por la democracia en condiciones de paz.¹⁷

En respuesta a esta prueba de legitimidad nacional que el EZLN había alcanzado, el gobierno reinició el diálogo el 5 de septiembre (mismo que él había roto) al tiempo que "solicita[ba] un amplio menú de material militar a Estados Unidos".¹⁸

Entretanto el pueblo mexicano esperaba el primer informe del presidente Zedillo y reiteraba su voto por la paz como lo hizo en agosto de 1994.¹⁹

Nacionalismo, soberanía y legitimación política militar

En América Latina el nacionalismo, como sentimiento, como mito o como ideología de la construcción de la nación, de la defensa del "nosotros", de lo que nos es común, como el lenguaje, las costumbres y en especial el territorio patrio que habitamos y que circunscribe nuestra unidad geopolítica, ha sido en manos del Estado, uno de los resortes principales que se han puesto en marcha para la defensa de la soberanía amenazada, esto es de la libertad y la vida de los ciudadanos de un país.

En este sentido la intervención de las Fuerzas Armadas, una de cuyas funciones es la defensa del territorio y el resguardo de las fronteras, es legítima, se justifica.

Ahora bien, la falta de crecimiento económico; es decir, la incapacidad del Estado para promover la generación de riquezas o para repartirlas y lograr un desarrollo social equilibrado para todos los sectores de la sociedad, es otra de las fuentes alternas de ilegitimidad que se han venido gestando en América Latina, dada la crisis económica que ya dura dos décadas. Ello ha obligado a los gobiernos a echar mano del nacionalismo, de la idea de la defensa del territorio, de las riquezas y valores culturales de la nación, de la soberanía, que tienen como

¹⁷ Cfr. J. Rodríguez, "Respaldo al EZLN para convertirse en fuerza política", en *Ibid.*, 28 de agosto de 1995, p. 51.

¹⁸ Cfr. D. Estévez, en *Ibid.*, 29 de agosto de 1995, p. 40.

¹⁹ Sergio Aguayo, dirigente de Alianza Cívica que coordinó la Consulta Nacional del EZLN señaló que "esta respuesta es un mensaje que la ciudadanía dio para exigir democracia... y no nos vamos a quedar sentados esperándola", en *Ibid.*, 28 de agosto de 1995, p. 51.

finalidad garantizar el despliegue de la libertad de la vida de los ciudadanos que conforman el Estado-nación, para legitimarse.

El culpar a fuerzas externas de las deficiencias en el manejo de la *res publica* ha sido una práctica constante en ciertos gobiernos en América Latina que sufrieron a lo largo de su gestación como Estados soberanos una mermada territorial.²⁰ Con ello se consigue desviar la atención de los problemas nodales económicos y políticos y forzar determinados conflictos que pueden ser controlados una vez que se ha logrado justificar determinadas acciones económicas y políticas que, en circunstancias normales, hubiesen sido imposibles de aplicar sin provocar conflictos internos más fuertes.

El poder gobernar para dotar a todos los ciudadanos de un país de los bienes materiales y sociales necesarios para el desarrollo de los individuos y del conjunto social, o sea, de las instituciones que hacen viable la anterior tarea, es el secreto de la legitimidad social, de la forma de lograr el convencimiento intelectual y moral por parte de los ciudadanos de la capacidad estatal; como lo es también la capacidad para la defensa de su soberanía amenazada por un "enemigo externo".²¹ Ahora bien, en situaciones de crisis económica o de crisis política y social o de la conjunción de las tres, en casos en los que la soberanía, como la definimos anteriormente, no está en peligro sino la legitimidad del gobierno, los militares han servido para apuntalarlo y ponerlo a salvo. En verdad, se trata de un acto maquiavélico, inmoral en esencia, donde el fin de legitimar al gobierno en crisis o de imponer medidas excepcionales se justifica mediante la apelación a la defensa de la soberanía territorial puesta en peligro por el "enemigo".

De este modo, tanto los militares como el gobierno aparecen como defensores de la unidad de la nación y así los grupos políticos que, con razón, juzgaban al gobierno ilegítimo o incapaz de cumplir con sus funciones primordiales son ilegítimos, perseguidos y/o puestos fuera de la ley.

²⁰ El conflicto territorial de Ecuador con Perú se remonta a los años de la creación de la Real Audiencia de Quito por el poder colonial en 1563, pasa por los primeros años de vida independiente en 1823, y se agudiza con la merma de casi la mitad de su territorio por parte de Perú en 1941, con la imposición del Protocolo de Río de Janeiro, cuya nulidad de hecho y de derecho Ecuador ha reclamado hasta la actualidad a los poderes internacionales que lo garantizaron en pleno conflicto mundial. Cfr. G. Núñez, "Aventuras y desventuras del Ecuador amazónico", en J. Gallardo, M. Alemán y otros, *Tiwintsa*, Quito, Ed. El Conejo, 1995, pp. 74-121, para una versión detallada del mismo.

²¹ En realidad se trata simplemente de un "enemigo" que intenta no sólo terminar con la soberanía de la nación, o sea, con la vida y libertad colectivas sino que pone en peligro la vida de cada uno de los individuos y su cultura. Se trataría, pues, de una situación potencial o de genocidio de hecho. En el caso del "enemigo interno" de acuerdo con la doctrina de la Seguridad Interna —con la cual no estamos de acuerdo— por analogía, los grupos de ciudadanos subversivos, alzados o insurgentes estarían atentando contra el Estado de Derecho, lo que obliga a éste a usar la fuerza para defenderse.

Bien llevada a cabo esta acción maquiavélica, o sea, el lograr un triunfo militar, una ganancia territorial, una derrota del enemigo o una defensa del territorio, aunque sea con altos costos materiales y sociales, la función legitimadora del gobierno se hace visible y al mismo tiempo los militares salen justificados, legitimados en sus funciones por los ciudadanos del país en cuestión y éstos se disponen, sin protestar, a aceptar los sacrificios posteriores que este enorme gasto social implica para cada uno de ellos y para el país. De no resultar el acto maquiavélico, tanto el gobierno como los militares que realizaron la simulación pueden entrar en una crisis mayor y poner en peligro la estabilidad política del Estado, dando así paso a un nuevo gobierno que convocaría a la unidad nacional para consolidar su acción económica y política.

El conflicto fronterizo peruano-ecuatoriano

Este análisis del conflicto armado, uno más de los muchos, que sucedió en los primeros días de enero de 1995,²² tiene como objeto ilustrar el caso del activamiento de la función legitimadora del gobierno y de las propias fuerzas armadas acudiendo a la estrategia de llamar al pueblo a respaldarlos.

Como se indicó más arriba, Ecuador y Perú tienen una larga historia de conflictos fronterizos y éstos en su devenir como naciones forman ya parte de su cultura. Ecuador, en el siglo XVIII, como Real Audiencia de Quito, dependiente del Virreynato de Lima, ejercía jurisdicción sobre casi un millón de kilómetros cuadrados. Cuando ésta pasó a ser parte del Virreynato de Nueva Granada en 1740 y se establecieron los límites de ambos virreynatos, su autoridad controlaba 700 mil kilómetros cuadrados. En el inicio de su vida independiente y con todos los protocolos, tratados y cesiones territoriales que tuvo que realizar en favor de sus vecinos Colombia, Brasil y Perú, para 1916 Ecuador como país abarcaba una extensión de 470 mil kilómetros cuadrados. En 1941, con la invasión del Perú a su territorio y la firma del Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, se redujeron a 270 mil kilómetros cuadrados.²³

Desde esa fecha hasta 1995 el gobierno ecuatoriano había declarado nulo el Protocolo en cuestión: *de jure*, porque bajo presión y amenazas de perder su soberanía como país independiente había sido obligado a firmarlo, lo que

²² Para mayor información sobre los pormenores del conflicto y sus aspectos militares ver J. Gallardo, "La defensa militar del Alto Cenepa", en J. Gallardo, M. Alemán y otros, *op. cit.*, pp. 7-31 y F. Vargas, *Tiwinza, toda la verdad*, Quito, s/e, 1995, pp. 2-114; en relación al conflicto en el ámbito diplomático ver J. Gallardo, *op. cit.*, pp. 31-48.

²³ Ver a este respecto, "Historia de un viejo conflicto", en *La epopeya del Cenepa*, Quito, Ed. Hoy, 1955, pp. 4-14.

jurídicamente invalidaba el Protocolo y *de facto*, pues era inejecutable dada la existencia de dos divisores de aguas —el de los ríos Zamora-Cenepa y Cenepa-Santiago— cuando el Protocolo en cuestión señala sólo uno, el de los ríos Zamora y Santiago.

Ahora bien, el conflicto sobre esta zona ha impedido durante largo tiempo entablar relaciones comerciales y de cooperación entre los dos países fronterizos y ha sido una fuente constante de escaramuzas militares y de ataques mutuos; asimismo ha sido un pretexto para que los gobiernos de ambos países y sus fuerzas armadas recurran a la fácil excusa de "agresión a la soberanía territorial" para movilizar el nacionalismo a flor de piel que ambos países ostentan, lograr la unidad nacional y los fines políticos de legitimación de los que hemos hablado, cuando en cada uno de ambos países se dan circunstancias críticas.

Por estas razones y en vista de aligerar el camino a la integración económica entre los dos países, el presidente Rodrigo Borja de Ecuador invitó a su homólogo de Perú, Alberto Fujimori a realizar una visita de Estado a Ecuador que éste último aceptó en enero de 1992. En esa visita Fujimori, después de excesivas demostraciones de amistad con el pueblo ecuatoriano, planteó al gobierno de Ecuador su "propuesta integral" sobre el Protocolo que, en esencia, ratificaba las tradicionales posiciones de Perú sobre el problema. Se intentó avanzar en ese campo con ocasión de la visita que el presidente Borja recíprocaría a Perú, pero el golpe de Estado protagonizado por el presidente Fujimori impidió este encuentro.

No obstante, desde 1992 hasta los primeros días del 1995 se había experimentado una real distensión; pero con el estallamiento del conflicto este corto camino iniciado volvió a empantanarse.

Resulta muy difícil, dado que la información es confidencial, secreto de Estado, saber cuál de los dos países inició el conflicto. En todo caso, para el análisis esta información no resulta relevante. El hecho es que en las noticias de la prensa tanto ecuatoriana como peruana se dio un inculpamiento mutuo. Por su lado, el mando militar peruano acusaba a los soldados ecuatorianos de infiltración en su territorio y los amenazaba con desalojarlos por las malas; a su vez, los soldados ecuatorianos capturan a patrullas peruanas infiltradas en su territorio que se defendieron a tiros. Es de este modo como el conflicto fue tomando cuerpo hasta llegar al enfrentamiento armado entre los dos países.

Los móviles del conflicto

En el caso del Perú el presidente Fujimori había ya maniobrado con extraordinaria habilidad para pasar del Estado de excepción al de derecho e intentaba su reelección. Estaba ya en la fase final de su campaña electoral y, como afirma el analista venezolano Rubén Carpio: "No bastó la suspensión de la Constitución,

la disolución del Congreso y la reorganización de la Corte de Justicia... Ahora según las estimaciones más serias, recurre al peligroso juego de la guerra cuando las encuestas empezaban a declinar y comprometían su triunfo electoral".²⁴ En cuanto a los militares peruanos, habiendo ya obtenido un gran triunfo en el combate frontal contra Sendero Luminoso, querían para su legitimación (manchada por algunos militares vinculados con el narcotráfico) y la de su presidente en campaña electoral, la definitiva resolución del problema limitrofe, de hace media centuria, por la vía rápida de la fuerza; de acuerdo a la tradicional postura esgrimida por la diplomacia peruana y recordada por el propio presidente en sus dos visitas al Ecuador.

Ahora bien, sus cálculos estratégicos se fundamentaban en su mayor poder de fuego, su cotidiano enfrentamiento con las guerrillas en la selva y el debilitamiento político del gobierno ecuatoriano que a principios de 1995 se hallaba desgastado luego de impulsar reformas constitucionales ligadas con la privatización de áreas estratégicas de la economía y el Seguro Social para completar el ajuste neoliberal; así como por el plebiscito de la llamada ley de libertad religiosa para consolidar ideológicamente a los sectores más conservadores que fueron su base principal de apoyo; además de los rumores del delicado estado de salud del presidente lo que ponía al país al borde de una crisis política y económica.

Además, dadas las circunstancias antes anotadas, resultaba bastante fácil para el gobierno peruano argüir que éste solamente se defendía de una escaramuza o intromisión territorial ecuatoriana que pretendía desviar la atención de los problemas políticos que el país vivía, desplazando el problema hacia el enfrentamiento con el Perú.

En el caso ecuatoriano, encontrándose el gobierno al borde de la crisis política y económica y sabiendo que el anuncio de un ataque peruano encendería la llama de la unidad nacional, como en otras ocasiones, se podrían manejar las difíciles circunstancias. Así, se hacía plausible una escaramuza armada o la idea de llevar adelante un conflicto fronterizo focalizado en el punto en litigio para evitar a toda costa la extensión de la guerra a otros puntos; de este modo, la sociedad entera se olvidaría momentáneamente de la situación crítica y, en aras de la sobrevivencia de la nación soberana, aceptaría el sacrificio de respaldar una acción militar defensiva.

Además, las Fuerzas Armadas podrían justificar un incremento del presupuesto para gastos de defensa nacional, justamente cuando se había anunciado que éste iba a disminuir y del mismo modo el porcentaje que las mismas reciben de la explotación petrolera. Por otro lado, en el ámbito diplomático, siendo Ecuador

²⁴ Citado por M. Alemán, "El conflicto en el ámbito diplomático", en J. Gallardo, M. Alemán y otros, *op. cit.*, pp. 40-41.

el país que había salido siempre perjudicado por las intervenciones peruanas a lo largo de la historia, le resultaba fácil al gobierno (en el caso de ser él, a través de las Fuerzas Armadas, el impulsor de la acción maquiavélica) aparentar ser la víctima y conquistar el apoyo internacional.

Los resultados del conflicto en el campo militar

Para Perú, la rápida acción bélica y la ofensiva diplomática declarando a Ecuador país agresor sólo funcionó en los primeros momentos. Encontró, por otro lado, a los militares ecuatorianos fuertemente preparados para dar la batalla solamente en el lugar en litigio, pero con estrategias defensivas muy flexibles para evitar una eventual agresión generalizada por parte de Perú, como había sucedido ya en 1981. Ello frustró la victoria rápida que Perú pretendía alcanzar –de acuerdo con su estrategia– y, conforme pasaba el tiempo, las pérdidas militares resultaron ser cuantiosas para éste y su ofensiva diplomática fue derrotada por la de Ecuador que llamó a los países garantes del Protocolo para que verificaran el reclamo ecuatoriano.

Ahora bien, la estrategia diplomática de reconocimiento del Protocolo de 1942 por parte de Ecuador fue una carta muy fuerte que este país jugó. Ello planteaba, por primera vez, la aceptación de la vigencia del mismo, negada desde hace 53 años por los gobiernos y por el pueblo ecuatoriano; pero al mismo tiempo se señalaba su inejecutabilidad en la zona donde existían los dos accidentes geográficos no mencionados en el Protocolo de Río, que era, justamente, el lugar donde se estaba desarrollando el conflicto.

En el campo de las estrategias militares, la táctica diplomática frustraba cualquier ofensiva bélica generalizada que el Perú hubiese podido emprender pues la hacía ilegítima a nivel internacional y segundo, forzaba a los garantes del Protocolo (Brasil, Chile y Estados Unidos) a involucrarse para verificar las agresiones y luego plantear un arreglo diplomático, una laudatoria o un arbitraje papal para dirimir la dificultad insuperable en el asunto de los límites, como realmente sucedió con la firma de la Declaración de Paz de Itamaraty en los primeros días de febrero de 1995.

En resumen, ambos países perdieron soldados, maquinaria de guerra e ingentes recursos pero no territorio, e iniciaron con los Garantes la desmilitarización de la zona del conflicto para negociar, después que se resuelvan los "impases subsistentes",²⁵ la paz definitiva que parece difícilmente alcanzable hasta el momento dada la intransigencia de ambos gobiernos.

²⁵ Ver Declaración de Paz de Itamaraty, en *Ibid.*, p. 44.

Ganancias políticas de ambos países

En el caso de Perú Fujimori, que había perdido una buena parte de los votos, triunfó en las elecciones y estará en el poder cinco años más; los militares a su vez con la acción pírrica se lavaron las manos por sus vinculaciones con el narcotráfico y gozarán, seguramente, de un incremento en el presupuesto militar para remozar y modernizar su armamento que lució caduco e ineficaz en el enfrentamiento con su vecino del norte.

En el caso ecuatoriano Durán —que había perdido el respaldo político de gran parte del pueblo y experimentaba una fuerte crisis política y esperaba un derrumbe económico, parecido al que México experimentó desde el 20 de diciembre de 1994—, salió fortalecido. Impuso una economía de guerra con durísimos ajustes fiscales, impuestos y gravámenes que se han vuelto permanentes. Esto es, aprovechó el momento de la euforia de la unidad nacional, del “triumfo de las heroicas Fuerzas Armadas”, para descargar sobre las espaldas del pueblo ecuatoriano la parte más fuerte del plan de *shock* neoliberal.

Los militares a su vez han legitimado y ensanchado su ya abultado presupuesto, gozan de un prestigio y respeto que nunca antes habían obtenido ya que, en el sentir popular, es la única vez en la historia de los enfrentamientos en que éstos no han salido humillados ni derrotados.

Pérdidas económicas y sociales de ambos países

Los cuadros que presentamos a continuación nos dan una idea aproximada de las condiciones reales de los dos países que se enfrentaron en el conflicto y de las enormes pérdidas económicas y sociales que sufrieron.

Frente a la realidad de pobreza y de miseria que vive la mayoría de la población de los dos países que se enfrentaron, el incremento del militarismo en ambos países es injustificable. El conflicto armado de enero y febrero de 1995, provocado por cualquiera de los dos países, no lo sabemos a ciencia cierta, en realidad sólo ha repercutido negativamente en la población más débil y necesitada; ella, en ambos lados, puso los muertos, la fe y el patriotismo y apoyó en el momento con grandes sacrificios pecuniaros la “sagrada defensa de la patria” y ahora, en ambos lados ésta soporta las consecuencias de la enorme pérdida económica y social.

Por el lado de los sectores medios, éstos secundaron las acciones militares y las apoyaron con los jóvenes que querían alistarse para la guerra; ahora, terminado el conflicto, están pagando con redoblados esfuerzos las consecuencias de los gastos de la guerra, alza de precios de los productos y bajos salarios profesionales. Los comerciantes, industriales y en especial los sectores financie-

Cuadro 3
Perú y Ecuador
Datos generales e índices de pobreza y atraso

| | Perú | Ecuador |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Superficie territorial km ² | 1,272.987 | 270.000 |
| Habitantes | 23,651.000 | 10,677.000 |
| Analfabetismo | 10.70% | 14.00% |
| Mortalidad infantil | 51/1000 | 55/1000 |
| Atención a la salud | 1 médico/1000 habs. | 1 médico/826 habs. |
| Desempleo urbano | 9.9% | 9.1% |
| Pobreza absoluta | 11,000.000 | 4,600.000 |

Fuente: "Los pueblos de la guerra", *Hoy*, Quito, fascículo núm. 6, 1995, p. 13 y *World Almanac*, 1995.

ros, aprovecharon la oportunidad para especular y abusar con el valor de los bienes de consumo, elevar el costo de los productos manufacturados y poner a resguardo sus capitales para luego especular con el valor del dólar e incrementar las tasas de interés.

En fin, los vendedores de armas, las grandes compañías transnacionales, con toda seguridad hicieron un negocio fabuloso y, como lo indicamos más arriba, continuarán ofreciendo armamento ya caduco en comparación con el que se estrenó en las guerras declaradas por intereses económicos transnacionales, como fue el caso de Irán-Irak o Irak-Kuwait, o con las que se emplean actualmente en la antigua Yugoslavia.

En todo caso en nuestros países, además de las pérdidas ya señaladas y del irreversible daño del entorno ecológico, se están reviviendo enemistades y odios entre pueblos hermanos y dilatando el proceso de cooperación y de integración de fronteras que sería extremadamente beneficioso para elevar el nivel de vida de la población más necesitada de ambos países.

No es ni justo, ni deseable seguir justificando el incremento de los presupuestos militares de nuestros países para continuar la irracional carrera armamentista que beneficia a las empresas del complejo industrial y militar de los países más desarrollados y mantiene en la postración a los países subdesarrollados que como es el caso de Ecuador y Perú tienen que pagar la factura.

Cuadro 4
Armas y efectivos militares
Perú y Ecuador

| Perú | | Ecuador | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Efectivos militares | 124.000 | Efectivos militares | 58.000 |
| Tanques | 460 | Tanques M-3 | 45 |
| Tanques y blindados | 385 | Tanques AMX-13 | 108 |
| Vehículos de campaña | 250 | Blindados sobre ruedas | 100 |
| Unidades antiaéreas | 295 | Piezas MK, Calibre 155 | 10 |
| Plataformas lanza cohetes | 14 | Morteros | 300 |
| Aviones MIRAGE 2000 | 12 | Misiles SAM | 75 |
| Aviones MIRAGE M-5 | 10 | Baterías antiaéreas | 80 |
| Aviones Sukhoi SU-22 | 40 | Aviones CESSNA 206 | 1 |
| Aviones CESSNA A-37B | 30 | Aviones LEARJET 24-D | 8 |
| Aviones Camberra MK-12 | 12 | Helicópteros de exploración | 1 |
| Aviones de transporte | 36 | Helicópteros de transporte | 72 |
| Helicópteros | 74 | Submarinos | 2 |
| Cruceros | 2 | Buques de combate | 12 |
| Fragatas | 4 | Helicópteros Bell | 5 |
| Destruyores | 2 | Avionetas CESSNA | 2 |
| Misileras | 6 | Aviones JAGUAR | 8 |
| Submarinos | 8 | Aviones KFIR | 9 |
| Lanchas de desembarco | 4 | Aviones STRIKEMASTER | 9 |
| Aviones antisubmarinos | 8 | Aviones MIRAGE F-LIE | 13 |
| | | Aviones MIRAGE F-LIB | 1 |
| | | Aviones CESSNA A-37B | 12 |

Fuente: "Los grandes combates", *Hoy*, Quito, fascículo núm. 1, 1995, p. 6 y periódico *La Nación*, Chile, 1º de febrero de 1995.

En el corto plazo, el enfrentamiento de enero y febrero de 1995 parece distenderse aunque no hay mucha esperanza de que el conflicto limítrofe sea sanjado definitivamente sin una negociación sensata entre ambos países. En todo caso, que la apertura de fronteras que el presidente Fujimori anunció en la Reunión del Grupo de Río en Quito no sea un fuego de artificio propagandístico para consolidar su imagen política deteriorada internacionalmente por el conflicto que hemos evocado sino que sirva para negociar un desarrollo conjunto de los lugares fronterizos donde se dio el enfrentamiento, pues sus pueblos están

abandonados y su población no dispone de los mínimos servicios de infraestructura, salud y educación necesarios para su supervivencia.

Por último, la mejor forma de obtener legitimidad política y de fortalecer la soberanía de gobiernos estatuidos –tal es el caso de Ecuador, Perú y México– es la promoción de la paz mediante el desarrollo de las libertades democráticas que permitan a sus pueblos luchar conjuntamente por la resolución de sus problemas más ingentes en vista de gozar de mayor libertad y mejor vida que es el anhelo universal de las sociedades que buscan los valores de la modernidad.